

Miguel Ángel Sierra

Han hecho falta muchos miles de muertos y el desmoronamiento de nuestra economía para que en España se empiece a hablar de ciencia. Esperemos que las previsiones de una inversión de tres mil ochocientos millones de euros (un incremento del 60% sobre los longevos presupuestos de Montoro), reflejada en los presupuestos que están a punto de aprobarse, se haga realidad. Este incremento en los fondos dedicados a investigación aliviará el daño que nos ha hecho los salvajes recortes en las inversiones en ciencia de los últimos diez años. Si se mantendrá o no esta inversión en el futuro, una vez que los fondos europeos de recuperación COVID-19 se acaben, es algo que tendremos que ver.

Esta colosal (desde un punto de vista de un investigador español) inversión en ciencia debe reavivar la agonizante llama de la investigación en este país. Esto ya ha pasado. Los que si tuviésemos pelo peinaríamos canas hace años, vimos como una inversión sustancial en investigación nos colocó en los *rankings* científicos mundiales, y, en el caso de la Química, nos situó en el puesto n.º 7 del mundo. Impresionante si tenemos en cuenta que, ni en los momentos más boyantes de la inversión en ciencia, superamos el 1,36% del PIB (2008-2009). En ningún momento nos acercamos al 3% de inversión media de los países desarrollados, entre los que se supone que nos encontramos. Parafraseando y modificando la frase de Churchill “nunca tan pocos hicieron tanto con tan poco”, porque, además el número de investigadores en España está muy por debajo de la media de los países con los que habitualmente nos comparan nuestros políticos.

Bienvenida sea la inversión en ciencia y que se incremente año tras año. La cuestión es si esto va a suponer algún cambio en la investigación en España. Dicho de otra forma ¿Es la inversión –el apoyo económico a infraestructuras, grupos de investigación y carreras investigadoras– la única solución a los problemas que tiene la investigación en España? La respuesta clara y contundente es NO. La inversión en ciencia es crucial para el desarrollo científico del país, pero no es la solución a un problema real que tiene la investigación española: La gobernanza de los centros de investigación públicos y de las universidades. Pocos sistemas son menos adecuados e ineficaces que el sistema de gobernanza español.

Nuestro sistema de investigación está sometido a la irracionalidad de absurdos y siempre cambiantes controles administrativos. Los investigadores trabajando en los centros públicos se ven sometidos a una dictadura férrea



de la administración que les obliga a solicitar permiso para cualquier mínimo gasto. Esto hace que nuestra competitividad a nivel internacional se vea seriamente disminuida. Por otra parte, esta burocracia enloquecida no supone ningún tipo de rendimiento de cuentas real. Lo único que se ha hecho en este sentido durante los últimos años es desviar fondos de proyectos de investigación para pagar auditorías sobre gastos del dinero que te han concedido, con la obligación por parte de las universidades y OPIs de devolver los gastos “no justificables”. Es un absurdo en sí mismo que el control de gastos lo tenga que pagar el propio investigador, pero bueno, para la administración de la ciencia española la presunción de inocencia no existe. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se decide qué gastos son elegibles?

¿Puede mejorar la investigación pública española solo con dinero? De nuevo la respuesta es tajante: NO. En un sistema endogámico como el nuestro, en el que las universidades están controladas por sindicatos y estudiantes, que son quienes deciden qué rector va a dirigir la Universidad durante cuatro años, no existe la menor posibilidad de mover el sistema hacia la excelencia. ¿O acaso algún organismo público ha exigido alguna responsabilidad a un Rector sobre su política investigadora o de contratación? La todopoderosa Autonomía Universitaria nos protege a todos de inquisiciones malintencionadas. Lo mismo vale para otros OPIs que por prudencia no voy a mencionar.

En estos meses se ha puesto también de moda la frase “hay que recuperar a los científicos que están en el extranjero”. Yo cuando oigo esto y miro a mi alrededor me parto de risa. ¿Qué le vamos a ofrecer a un investi-

gador? Un sueldo muy por debajo de la mitad de lo que recibe fuera. Un puesto temporal y precario. Pegarse con los investigadores “de la casa” por un trozo de mesa de laboratorio, perder una mañana para comprarse una impresora o una placa de agitación, no poder contratar con tus fondos de investigación a quien tú quieras, sin que te den el visto bueno las comisiones de contratación y de personal y –el diablo nos libre– la bolsa de trabajo de la institución... Parece lógico que, si alguno de nuestros investigadores vuelve a este país, lo haga a los centros que se han salido del sistema de gobernanza estatal, y que están demostrando un día tras otro qué es lo que falla en el sistema público de investigación en este país, aparte de la escasez de fondos. La química española ha conseguido 6 ERC-Sinergy de los 34 que ha otorgado Europa en la última convocatoria. No está nada mal. Sin embargo, no deja de llamar la atención que todos los galardonados, excepto uno, trabajan en entidades asociadas a la Universidad o Centros de Investigación (ICREA, IKERBASQUE, CIQUS, IMDEA, etc.).

Y además están los científicos del exilio interior. ¿Cómo puede una universidad tener a investigadores que van por su segunda ERC como profesores contratados doctores, cuando tienen grupos de investigación y calidad investigadora a nivel de catedrático? De nuevo la gobernanza. Hay una lista de prelación pactada con los sindicatos que hay que respetar y, oye, no se os olvide que, si éste tiene mejor currículum que yo no es que sea más listo, es que ha tenido más suerte.

Espero que la inyección de dinero venga acompañada de una inyección de razón. Si queremos que la ciencia española avance, lo primero que tenemos que hacer es pedir que cambien los sistemas de gobernanza del sistema científico público. Tenemos en donde fijarnos. Los centros mencionados arriba son, no sé como calificarlos, “diferentes”, “mejor gestionados”, “con evaluaciones periódicas severas de sus investigadores”, “capacidad de contratar a

quienes los comités científicos de los centros consideren oportuno”. Los resultados están a la vista.

Mucho me temo que no va a ser así. Un catedrático ya jubilado tenía en su despacho un cartel enmarcado que rezaba “si me dieran los medios adecuados podría demostrar mi total incompetencia”. La inteligencia y la capacidad investigadora requieren de un ambiente que las cuide y las mime. Un investigador necesita dinero (cuanto más mejor) pero, por encima de todo, necesita un ambiente en el que se le reconozca por sus méritos, se le promueva en función de estos y no se le obligue a perder una parte importante de su tiempo en un papeleo absurdo y estéril. Justo todo lo que no tenemos en el sistema de investigación público. Si no cambia el sistema de gobernanza seguiremos en un infierno burocrático y endogámico, con chorreras de oro en las calderas, pero, al fin y al cabo, un infierno.

Por último, no nos olvidemos que la apuesta del Gobierno para cambiar la economía del país se centra en el desarrollo de empresas tecnológicas y en la descarbonización del modelo energético. Este tema da para varios ensayos y editoriales. Lo dejo en una pregunta: si este modelo requiere de una estructura de investigación científica potente y, en paralelo una industria con un sistema de investigación bien establecido, ¿cómo lo van a hacer? Me temo que, como otras veces, compraremos las células solares a los chinos, las baterías para los coches eléctricos a los coreanos y los chips de ordenador a quien nos los deje más baratos. Eso sí, el ensamblaje se hará –con suerte– en España.

Gracias por leer.

MIGUEL Á. SIERRA
Editor General de *Anales de Química*